

LA TRONERA

ANTONIO GALA

La Armada humana

El fenómeno meteorológico llamado, con eufemismo, *La Niña* ha seguido al de *El Niño* empeorándolo. Esperemos que *La Madre*, que coincide con la naturaleza, no prosiga su horrible tarea. No digo que estén mal las oraciones y pésames a Honduras, Nicaragua, México, El Salvador y Guatemala; pero estarían mejor las inmediatas ayudas materiales. Ya que las malas infraestructuras de la pobreza facilitan las catástrofes, que la solidaridad remedie los pecados del abandono. Que nadie pueda dormir plácidamente mientras miles de seres, supervivientes de tantas calamidades, caen vencidos por los elementos. La verdadera Armada Invencible sería la que fuese contra éstos y en favor de los pobres.

María Estuardo no es una mera «boutade» de Garzón

Algunos pensarán que Baltasar Garzón incurre en la pura anécdota sin peso jurídico cuando, en su amplísima solicitud oficial a Gran Bretaña para que conceda la extradición del general Pinochet, cita precedentes históricos en los que la propia Gran Bretaña ha estado implicada, como la denegación de inmunidad a María Estuardo, que fue ajusticiada en el siglo XVI.



¡El siglo XVI! Parece una broma. Pero en el sistema británico de *common law*, en el que la Justicia se asienta en el Derecho consuetudinario y en la jurisprudencia creada por cada fallo judicial, no es baladí el caso de la reina de Escocia a la que Inglaterra denegó esa «inmunidad soberana» que hoy ofrece al ex dictador chileno. Quizá un argumento así haga, al menos, reflexionar a la comisión judicial de la Cámara de los Lores que examina hoy los recursos contra la decisión

del tribunal londinense que decidió la puesta en libertad de Augusto Pinochet por «inmunidad soberana», ya que los delitos de los que lo acusa Garzón fueron cometidos cuando era jefe de

Estado. Garzón cita otros casos más recientes como el del enjuiciamiento —suscrito por Gran Bretaña— en Nuremberg de Karl Dönitz, el almirante que sucedió a Hitler a la cabeza del III

Reich. Y resalta también que la Convención sobre el Genocidio de 1948 obliga al Reino Unido a no proteger a un acusado de ese delito. Sí, estaría más que justificado que los Lores denegasen esa vergonzosa *inmunidad eterna* para jefes de Estado criminales. (Con ella, Londres sería el refugio dorado de todos los Milosevic y los Sadam...). Por Derecho, y no sólo por *boutades* históricas. De no denegarla, sería todo un baldón en la tradición británica de defensa de los derechos humanos.

José Borrell trata de ganar protagonismo

«¿Y qué le parece lo que dice Felipe González sobre Pinochet?», le preguntaron, más o menos, el pasado domingo a Borrell en televisión. Y él respondió: «Que diga lo que quiera. La opinión relevante de los socialistas es la mía». Ayer mismo ratificaba esa postura. Y Antonio García Santesmases, portavoz de Izquierda Socialista, insistía en lo mismo: «El protagonismo dentro del partido lo debe tener Borrell». El candidato se está esforzando por conseguir que su deseo —razonable, pero sólo deseo, por el momento— empiece a hacerse notar en el terreno de las realidades prácticas. Conciliador, ha tratado durante meses de evitar enfrentarse clara y decididamente a Felipe González, a todo lo que el ex presidente representa... y a los muchos que lo representan dentro de la maquinaria central de su partido. Pero no le están dejando otro remedio.

DE VUELTA Y MEDIA

El candidato

La masajista del felipeano, siguiendo instrucciones muy precisas, desoyó al común sentido, al guión y al respetable y se dedicó a interrogarle sobre el color de su dormitorio, el de su piel, el de su índole religiosa. El había desdenado los consejos: *Borrell, cuidado con ella...* Ahora, estudia con su *staff* acudir a la oficina de Amnistía Internacional más próxima para denunciar el acoso.

—ERASMO

EL MUNDO
DEL SIGLO VEINTIUNO

UNIDAD EDITORIAL S.A.

PRESIDENTE
ALFONSO DE SALASDIRECTOR
PEDRO J. RAMÍREZDIRECTOR GENERAL
BALBINO FRAGADirectores adjuntos: Jorge Fernández, Fernando Baeta, Miguel Ángel Mellado (Fin de Semana)
Adjuntos al Director: Juan Carlos Laviana, Alfonso Rojo, Casimiro G. Abadillo, Melchor Miralles.
Adjunto para relaciones internacionales: Víctor de la Serna.
Director de arte: Carmelo G. Caderot.
Internet: Mario Tascón.Secretario general: Juan González. Director gerente: Antonio Fernández-Galiano.
Subdirector gerente: Julio de Andrés. Asesor jurídico: Alfonso de la Dehesa.
Director comercial: Alejandro de Vicente

Dep. Legal: M-36233-1989. Imprime: Fabripress, Avda. Constitución, 3. Torrejón de Ardoz. OJD: La difusión promedio del último control fue de 284.519 ejemplares

OTRO VALIENTE PASO DE
AZNAR HACIA LA PAZ

El jefe del Gobierno confirmó ayer lacónicamente que ha autorizado la toma de contactos con el entorno de ETA. Poco después, el portavoz del Ejecutivo aclaró que esos contactos «con el llamado MLNV» (Movimiento de Liberación Nacional Vasco) apuntan a acreditar que la decisión de la organización terrorista de abandonar la violencia es definitiva. Obvió decir —era innecesario— que, de confirmarse tal cosa, habrá negociación.

¿Cómo? ¿Entre quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? El Gobierno no quiere entrar en detalles, y se entiende. Se sabe, eso sí, que José María Aznar está decidido a seguir el proceso muy de cerca, no delegando en nadie salvo para lo imprescindible. Lo más probable es que la tarea acabe subdividiéndose: habrá diálogo directo con ETA, de un lado, para evaluar el problema de los presos —aunque no sólo—, y habrá por otro lado conversaciones más específicamente políticas, en las que todas las fuerzas parlamentarias habrán de tener participación.

Estamos, en todo caso, ante un giro fundamental de los acontecimientos, que afecta hasta al lenguaje: nunca el Gobierno se había referido al MLNV, utilizando esas siglas, como lo hizo ayer. La iniciativa que ha emprendido desborda ampliamente no ya sus

planteamientos iniciales —que para qué recordar— sino incluso posiciones más matizadas y recientes, como la que exigía «un signo inequívoco» de ETA antes de pasar a mayores. Al final, ha optado por prescindir de los contactos *exploratorios* del Cesid —difícilmente podría encontrarse un organismo que suscitara más recelos en la otra parte— y tomar la iniciativa directamente y con valentía, como hizo John Major en su día con el IRA.

El Gobierno vasco ha manifestado la «gran satisfacción» que le produce la iniciativa de Aznar. IU la ha calificado de «fabulosa». EA dice que «éste es el camino». Incluso UPN la ve «correcta». Sólo los portavoces de la cúpula del PSOE la ha criticado. Se quejan con amargura de que no fueron advertidos de ella con la necesaria anticipación, lo que les mueve a calificarla de «imprudente». Pero hay que subordinar las formas a los contenidos. Así lo ha hecho el ex ministro Enrique Múgica y así lo ha remachado el portavoz de la Junta de Andalucía, para quien una decisión como ésa «no debería ser objeto de polémica».

Ante asunto de tanta trascendencia, los celos partidistas están de más. Si la paz acaba por lograrse, nunca será exclusiva de Aznar: corresponderá a todos cuantos la hayan propiciado.

¿QUE PINTABA PRADO?

Miles de puestos de trabajo y cientos de miles de millones de pesetas se volatilizaron con el hundimiento de las empresas de KIO en España. Pero no todos perdieron con esta catástrofe económica: personajes como Javier de la Rosa y Manuel Prado llenaron sus bolsillos a la misma velocidad con que se iban vaciando las arcas del grupo kuwaití durante la guerra del Golfo.

Al Bader, el hombre que administra ahora las inversiones de Kuwait en todo el mundo, declaró anteayer en Londres que Manuel Prado negoció con las autoridades de su país como representante del Gobierno español. Prado asistió en 1994 y 1995 a varias reuniones, en las que los nuevos gestores de KIO, antiguos directivos como Jaffar y Al Sabah y los enviados del Gobierno de González discutieron un posible arreglo amistoso para evitar que el caso fuera zanjado en los tribunales.

No hubo pacto y KIO continuó con sus acciones contra De la Rosa y otros ex directivos por un doble procedimiento: civil en Londres y penal, en la Audiencia Nacional. Los kuwaitíes denunciaron transferencias por importe de 55.000 millones de pesetas

realizadas por orden de Javier de la Rosa a cuentas secretas. Prado recibió 12.000 millones de pesetas. Nunca se ha podido aclarar por qué.

Ayer, mientras Narcís Serra aseguraba que no le constaba que Prado hubiera representado al Gobierno español, Antonio Zabalza —su hombre de confianza, cabeza visible de la delegación española en aquellas negociaciones, ex jefe del Gabinete de Presidencia y ahora presidente de Ercros, una de las empresas de KIO— sí confirmaba este extremo, matizando que Prado participaba a requerimiento de las autoridades de Kuwait.

¿Qué pintaba Prado en aquellas reuniones? El anterior Gobierno, que concedió generosas subvenciones a KIO, tiene pendiente una explicación. La Audiencia Nacional, que ya ha dictado auto de prisión contra De la Rosa, debería también incriminar por algo más que delito fiscal a Prado, que, según revela ahora Al Bader, fue dejado fuera de las acciones judiciales por decisión política. Y el Parlamento debería abrir una investigación sobre este asunto, en el que se fraguaron enormes fortunas privadas a costa de grandes perjuicios públicos.

RICARDO Y NACHO

